



ifs24

Índice
de Finanzas
Sostenibles 2024

Retos y oportunidades para acelerar la
transición hacia finanzas más sostenibles
en América Latina y el Caribe



gflac

GRUPO DE
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO
LAC



**Finanzas
Sostenibles
para el Futuro**



**Índice
de Finanzas
Sostenibles**



**Hub
de Finanzas
Sostenibles**



**Climate
and Sustainable
Finances Dialogues**

Autores:

Dra. Sandra Guzmán Luna

Fundadora y Directora General, GFLAC

Mtro. Orlando Barbosa Mejía

Asociado de Finanzas Climáticas Públicas, GFLAC

Estrategia de Comunicación y diseño:

Mtra. Marisol Marín

Asociada Senior en Comunicación Estratégica
Internacional, GFLAC

Lic. Federika Logwinczuk

Asociada en Comunicación Estratégica Institucional,
GFLAC

Lic. Jhon Cortés

Asociado Senior en Diseño Creativo, GFLAC

Revisión y Edición de Contenido en Inglés:

Liliana Elizondo

Asociada de Operaciones y Fortalecimiento
Institucional, GFLAC



Esta publicación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
No es una licencia de Cultura Libre.

Introducción

América Latina y el Caribe, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, se encuentran en un momento decisivo para redirigir sus políticas económicas hacia la sostenibilidad, con el objetivo de enfrentar los desafíos climáticos que amenazan la región y aprovechar las oportunidades de impulsar un crecimiento resiliente. La transición hacia una economía baja en carbono es fundamental no solo para cumplir con los compromisos internacionales para combatir el cambio climático, sino también para garantizar un crecimiento económico inclusivo y equitativo.

En este contexto, el **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS)**, elaborado por el **Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)**, es una herramienta que permite monitorear los ingresos y egresos a nivel nacional e internacional que tienen los países en desarrollo para atender el problema del cambio climático y otros objetivos de desarrollo sostenible. Además, identifica las fuentes de ingresos y gastos intensivos en carbono que podrían estar obstaculizando el avance hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. En este sentido, el IFS busca identificar las brechas, retos y oportunidades de transformación de los aparatos de las finanzas públicas en los países en desarrollo para avanzar hacia finanzas más sostenibles.

Los resultados preliminares del IFS 2024, aplicado a los **20 países** más emisores de la región de América Latina y el Caribe, revelan que los países de la región enfrentan significativas brechas de financiamiento que obstaculizan la transición hacia la sostenibilidad. En conjunto los 20 países de estudio recibieron **19 veces** más ingresos por actividades intensivas en carbono que por financiamiento climático y para la biodiversidad, mientras que los presupuestos nacionales asignados a dichas actividades intensivas en carbono superan **12 veces** al presupuesto sostenible, dedicado a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

Además, el IFS 2024 muestra que países como Guatemala con una puntuación de 2.6 de 4.0 puntos, Honduras y Jamaica con 2.5 puntos, muestran un incremento en la asignación de presupuestos asociados a la atención del cambio climático. Caso contrario al de Bolivia con 1.0 punto, Trinidad y Tobago con 0.6 puntos, y Cuba con 0.5 puntos, son los países con un menor nivel de finanzas sostenibles debido a su incremento de ingresos y egresos asociados a la venta y producción de combustibles fósiles.

Asimismo, el IFS 2024 destaca que los países de la región aún están lejos de cumplir con la meta de destinar al menos 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a iniciativas sostenibles, un objetivo crucial para enfrentar los desafíos climáticos actuales. Para movilizar recursos hacia sectores sostenibles y garantizar un futuro más resiliente, será clave una acción coordinada que incluya instrumentos como la fijación de precios al carbono, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y la emisión de bonos verdes.

Estos resultados subrayan la necesidad urgente de una transición financiera hacia modelos sostenibles en la región. El IFS está sujeto a un proceso continuo de revisión y actualización, con el fin de asegurar la calidad y pertinencia de la información proporcionada. En este sentido cualquier sugerencia o recomendación que contribuya a mejorar su contenido será altamente apreciada. No dudes en contactarnos a través del siguiente correo electrónico: finanzassostenibles@gflac.org



Índice de Finanzas Sostenibles

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) es una herramienta que permite monitorear los ingresos y egresos nacionales e internacionales que se tienen en países en desarrollo para atender el problema del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible asociados al mismo, así como conocer aquellos recursos que podrían estar obstaculizando dicho progreso, como actividades asociadas a la extracción y producción de combustibles fósiles.

En esta quinta edición del IFS con datos a 2023 fue aplicada a los 20 países más emisores de la región de América Latina y el Caribe. El IFS se calcula con base en cuatro variables compuestas de diversos rubros de finanzas públicas tanto nacionales como internacionales.¹



El objetivo del IFS es proporcionar un análisis exhaustivo sobre las trayectorias de ingresos y egresos vinculados tanto a la lucha contra el cambio climático como el desarrollo sostenible en países en desarrollo. Esto incluye identificar no solo las inversiones alineadas con dichos esfuerzos, sino también aquellas que podrían contravenir con los objetivos de sostenibilidad. A través de este análisis, se busca

¹ La selección de las variables y construcción del Índice de Finanzas Sostenibles tiene su fundamento teórico en el trabajo de Guzmán, Sandra (2020). La incorporación del cambio climático en los presupuestos públicos de los países en desarrollo: Un análisis de métodos mixtos aplicados a los países de América Latina y el Caribe. Departamento de Política, Universidad de York. Reino Unido.



clasificar a los países según sus niveles de finanzas sostenibles, lo que facilita la identificación de brechas, necesidades de inversión y oportunidades de financiamiento en los países evaluados.

La información recopilada en el IFS se actualiza anualmente y se basa en datos públicos y accesibles, lo que garantiza la transparencia y la relevancia de los resultados. Este enfoque permite ofrecer una visión actualizada de las dinámicas financieras relacionadas con el desarrollo sostenible, proporcionando a los gobiernos, organizaciones y actores una herramienta valiosa para orientar la toma de decisiones y movilizar recursos hacia iniciativas sostenibles.

El cálculo del IFS se basa en la asignación de una puntuación entre 0 y 1 puntos para cada una de las cuatro variables estimadas. Las variables de Ingresos Sostenibles y Presupuestos Sostenibles se consideran positivas, lo que significa que aquellos países que generen y/o destinen mayores recursos a actividades a atender el cambio climático y a promover el desarrollo sostenible obtendrán una mayor puntuación cercana a 1 punto, mientras que los que generen y/o destinen menor recursos a estas actividades obtendrán una puntuación más cercana a 0 puntos.

Caso contrario a las variables de Ingresos Intensivos en Carbono y Presupuestos Intensivos en Carbono, en este caso los países que generen y/o asignen mayores recursos a actividades intensivas en carbono obtendrán una puntuación cercana a 0 puntos, mientras los que generen y/o asignen menores recursos a estas actividades obtendrán una puntuación más cercana a 1 puntos.

En este sentido, la valoración del IFS dependerá de la puntuación obtenida en cada una de las cuatro variables evaluadas. La valoración total puede oscilar entre 0 y 4 puntos. En función de esta puntuación, los países se clasifican en 7 niveles de finanzas sostenibles: **MUY ALTO**, **ALTO**, **MEDIO ALTO**, **MEDIO**, **MEDIO BAJO**, **BAJO** y **MUY BAJO**.

Por ejemplo, si un país tiene altos ingresos sostenibles y altos presupuestos sostenibles, podría obtener una puntuación de 1 punto en ambas variables. Sin embargo, si también tiene altos ingresos intensivos en carbono y altos presupuestos intensivos en carbono, su puntuación en estas variables sería de 0 puntos, resultado en una puntuación final de 2 sobre 4 puntos, ubicando al país en el nivel **“MEDIO”** de finanzas sostenibles. En la siguiente tabla se detalla un ejemplo hipotético de la estimación del IFS.

Tabla 1. Ejemplo hipotético de la estimación del IFS

Valoración de variables	Ecuación operativa	Resultado IFS	Clasificación de los 7 niveles de finanzas sostenibles
IS: 1.0 IIC: 1.0 PS: 1.0 PIC: 1.0	$IS + IIC + PS + PIC = IFS$	$1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 4.0$ El país obtendría un puntaje de 4.0 puntos, ubicándolo en el nivel "MUY ALTO" de finanzas sostenibles.	<ul style="list-style-type: none"> • MUY ALTO: Puntaje: 3.5 – 4.0 • ALTO: Puntaje: 2.9 – 3.4 • MEDIO ALTO: Puntaje: 2.3 – 2.8 • MEDIO: Puntaje: 1.8 – 2.2 • MEDIO BAJO: Puntaje: 1.2 – 1.7 • BAJO: Puntaje: 0.6 – 1.1 • MUY BAJO: Puntaje: 0.0 – 0.5
IS: 0.5 IIC: 0.3 PS: 0.4 PIC: 0.2	$IS + IIC + PS + PIC = IFS$	$0.5 + 0.3 + 0.4 + 0.2 = 1.4$ El país obtendría un puntaje de 1.4 puntos, ubicándolo en el nivel "MEDIA BAJO" .	

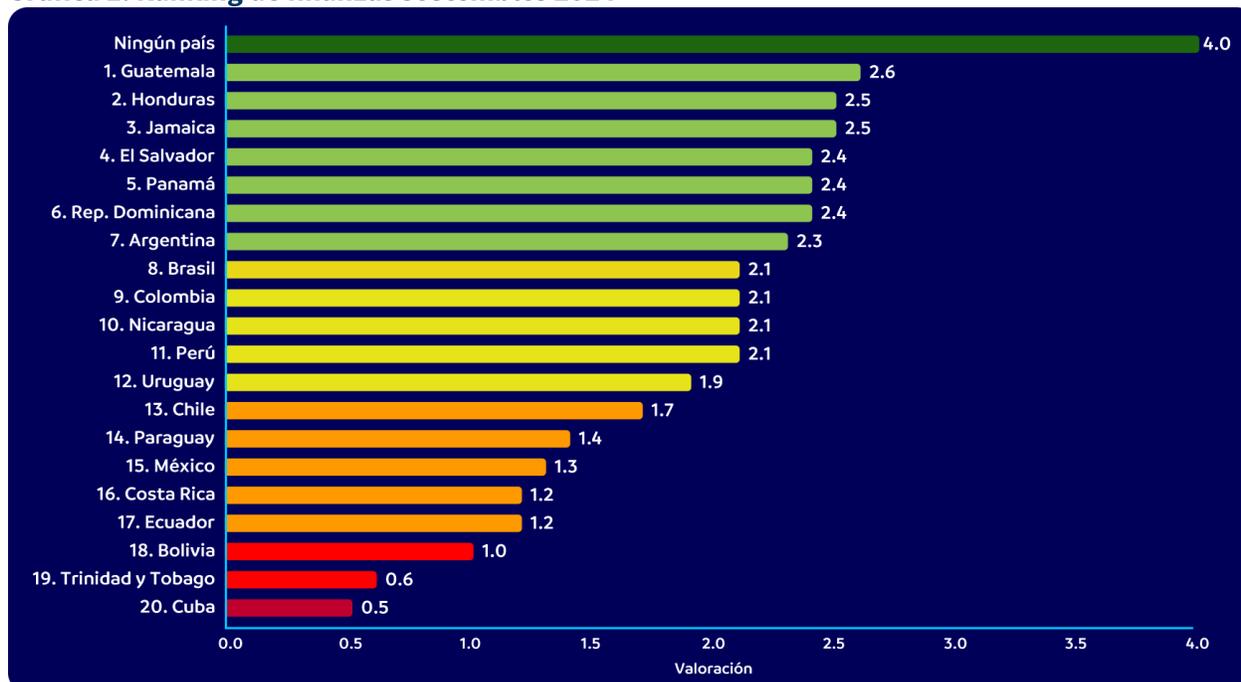




Resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024

Índice de Finanzas Sostenibles

Gráfica 1. Ranking de finanzas sostenibles 2024



Fuente: Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El **Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024** revela un panorama preocupante para América Latina y el Caribe: ninguno de los 20 países más emisores de gases de efecto invernadero en la región de América Latina y el Caribe logró ubicarse en los niveles **“MUY ALTO”** o **“ALTO”** de finanzas sostenibles. Este resultado evidencia la persistente brecha entre los flujos financieros provenientes de actividades sostenibles y aquellos generados por industrias intensivas en carbono. Esta situación refleja la urgencia de orientar las inversiones hacia modelos económicos más sostenibles para acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y abordar los retos del cambio climático.

Guatemala, con una puntuación de 2.6 sobre un máximo de 4.0 puntos, lidera el ranking de la

región al posicionarse en el nivel **“MEDIO ALTO”**

Este posicionamiento se debe a sus esfuerzos en la reducción de la dependencia de ingresos provenientes de actividades de alto impacto ambiental, así como al aumento en la asignación presupuestaria para iniciativas relacionadas con la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos y la conservación de la biodiversidad.

Otros países que alcanzaron el nivel **“MEDIO ALTO” de finanzas sostenibles son Honduras y Jamaica con una puntuación de 2.5 puntos; El Salvador, Panamá y República Dominicana con 2.4 puntos; y Argentina con 2.3 puntos.**

Argentina, en particular, experimentó un avance significativo respecto a la edición anterior debido

a que en esta edición se incluyó información relacionada con el financiamiento para la biodiversidad. Sin embargo, aunque estos países muestran avances hacia una mayor sostenibilidad financiera, aún enfrentan importantes desafíos, como diversificar sus economías, reducir la dependencia de industrias extractivas y de combustibles fósiles, y mejorar la asignación de recursos hacia actividades de bajo impacto ambiental.

En el nivel **“MEDIO”** de finanzas sostenibles se encuentran Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá, todos con una puntuación de 2.1 puntos, seguidos de Uruguay con 1.9 puntos. Aunque estos países han mostrado algunos avances, su progreso sigue siendo limitado y está lejos de satisfacer las necesidades de inversión necesarias en sectores críticos como la transición hacia fuentes renovables, la conservación de la biodiversidad y la adaptación a los impactos del cambio climático. Esta falta de recursos compromete su capacidad para alcanzar los objetivos climáticos globales. Además, estos países suelen enfrentarse a barreras estructurales, como economías dependientes de actividades extractivas o intensivas en carbono, capacidades institucionales limitadas y marcos regulatorios para incentivar la transición hacia modelos económicos más sostenibles.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** de finanzas sostenibles, se ubican Chile con 1.7 puntos, seguido de Paraguay con 1.4 puntos, México con 1.3 puntos, Costa Rica y Ecuador con 1.2 puntos. Estos países reflejan avances limitados y serias deficiencias en la asignación de recursos hacia sectores sostenibles, lo que compromete su capacidad para enfrentar los retos climáticos y ambientales de manera efectiva. En el caso de México, aunque logró una ligera mejora respecto a la edición anterior, su posición evidencia una fuerte dependencia de actividades intensivas en carbono, como la extracción de petróleo y gas. A esto se suma un presupuesto insuficiente para financiar la transición energética y la protección

ambiental. México, siendo una de las principales economías de la región, tiene un papel vital en liderar la transición hacia energías limpias, pero sus políticas actuales han priorizado inversiones en combustibles fósiles, retrasando el desarrollo de proyectos de energías renovables y tecnologías sostenibles.

Por otro lado, países como Bolivia con 1.0 puntos y Trinidad y Tobago con 0.6 puntos se encuentran en el nivel “BAJO” de finanzas sostenibles, debido a su alta dependencia de actividades relacionadas con los combustibles fósiles y la limitada inversión en iniciativas climáticas. Cuba ocupa el último lugar en el ranking con una puntuación de 0.5 puntos, ubicándose en el nivel “MUY BAJO”.

El desempeño de Bolivia y Trinidad y Tobago muestran economías profundamente atadas a industrias extractivas y de alta intensidad en carbono. En el caso de Trinidad y Tobago, su dependencia histórica de la producción de gas natural y petróleo lo convierte en uno de los países con mayores emisiones per cápita de la región. Mientras que Bolivia presenta una estructura económica limitada, con un enfoque centrado en la exportación de gas natural como principal fuente de ingresos. Ambos países enfrentan serios desafíos para diversificar sus economías e invertir en sectores sostenibles que contribuyan a una transición energética efectiva. Cuba, por su parte, se enfrenta no solo a limitaciones económicas y estructurales, sino también a una marcada falta de transparencia y datos sobre variables clave, como los ingresos y presupuestos relacionados con actividades intensivas en carbono. Esta opacidad no solo afecta su puntuación en el índice, sino que también limita su capacidad para atraer financiamiento internacional. Si no se mejora la disponibilidad y calidad de la información, Cuba corre el riesgo de ser excluida de futuras ediciones del índice.

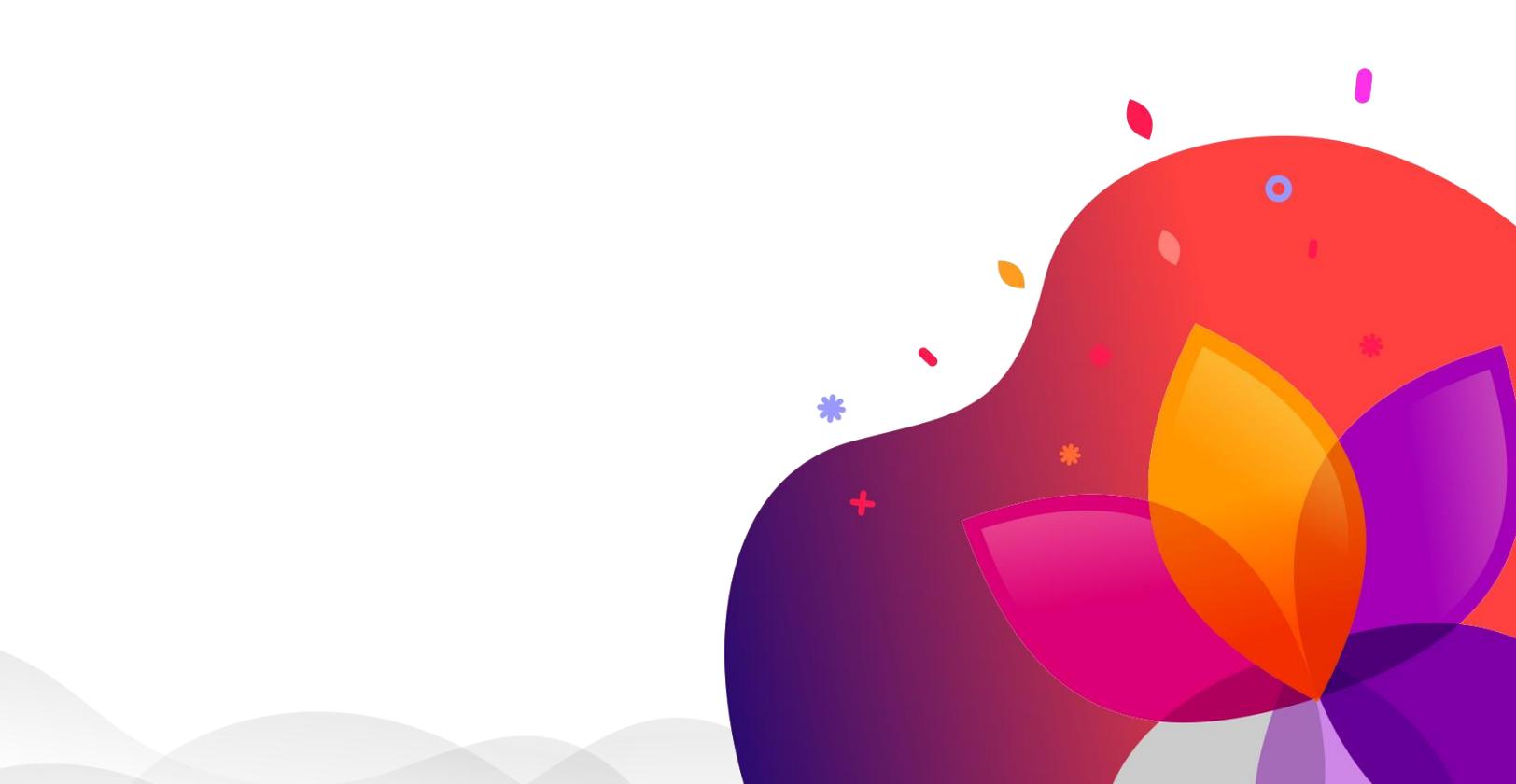


En general, los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 evidencian una realidad ineludible: América Latina y el Caribe se encuentra rezagado en la transición hacia modelos financieros sostenibles. Ninguno de los países de la región alcanzó los niveles **“MUY ALTO”** o **“ALTO”** de finanzas sostenibles, lo que demuestra una fuerte dependencia en actividades económicas de alto impacto ambiental, como la minería intensiva, la explotación y comercialización de combustibles fósiles. Esta situación no solo contribuye al agravamiento de la crisis climática global, sino que también expone a la región a riesgos significativos en términos de estabilidad económica, social y ambiental.

A pesar de algunos avances individuales, el panorama general muestra que los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes para abordar la magnitud de los desafíos climáticos. La persistente brecha entre los ingresos generados por actividades sostenibles y

aque aquellos provenientes de industrias intensivas en carbono es una prueba clara de la necesidad de una transformación estructural en las economías de la región. Este cambio requiere una reorientación estratégica de los flujos financieros hacia sectores de bajo impacto ambiental y alto potencial de desarrollo sostenible.

Asimismo, el índice revela fallos en la gobernanza climática y financiera. Muchos países de la región carecen de políticas robustas y mecanismos efectivos para atraer y canalizar recursos hacia proyectos sostenibles. Además, la falta de transparencia en la gestión de recursos y la ausencia de información confiable en algunos casos limita la capacidad de planificar e implementar estrategias efectivas para la transición. En este contexto, el IFS 2024 debe servir como un llamado urgente a la acción para los gobiernos, el sector privado y la comunidad internacional.



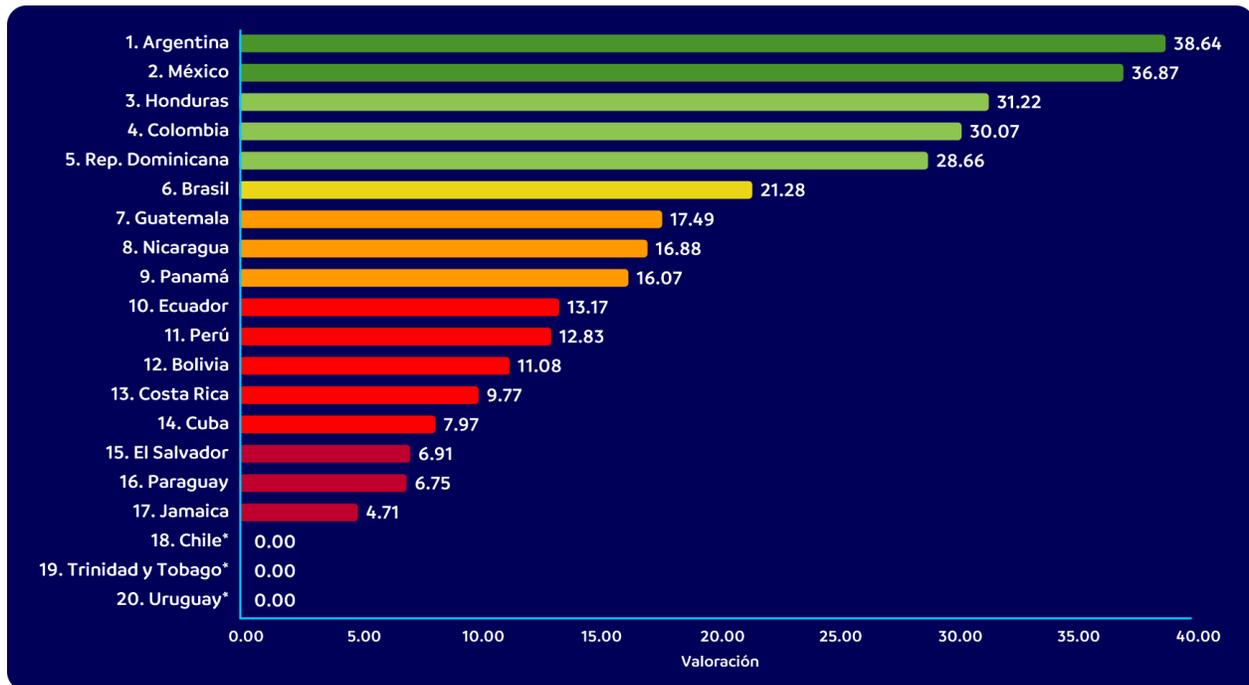


Ingresos Sostenibles

La variable de **Ingresos Sostenibles (IS)** sistematiza los ingresos obtenidos por financiamiento para el desarrollo provenientes de fuentes bilaterales y multilaterales y otros flujos oficiales, destinados a la atención de la biodiversidad y cambio climático. El cálculo de esta variable se basa en el porcentaje que representa el financiamiento destinado a la biodiversidad y cambio climático con respecto del total del financiamiento para el desarrollo.

La información utilizada proviene de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas, con datos actualizados hasta 2021, los más recientes disponibles. Es importante señalar que Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay no figuran como receptores de este tipo de financiamiento, por lo que no se dispone de datos para estos países.

Gráfica 2. Ranking de ingresos sostenibles 2024 (% del total) datos a 2021



*Sin datos

Fuente: Elaboración propia con información de la OECD consultados en el Aid Atlas en 2024 con datos a 2021.

Los resultados muestran que Argentina y México se destacan como los principales receptores de financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático en la región, alcanzando un nivel **“ALTO”** de ingresos sostenibles. Argentina recibió un total de 2.0 mil millones de dólares destinados biodiversidad y cambio climático, lo que

representa el **38.64%** de su financiamiento total para el desarrollo.

No obstante, más del 95% de estos recursos, equivalente a 1.9 mil millones de dólares, provienen de préstamos, indicando una gran dependencia de mecanismos crediticios. Esta situación plantea riesgos importantes para la sostenibilidad fiscal del país, ya que el incremento

del endeudamiento podría limitar su capacidad para implementar políticas climáticas y de conservación a largo plazo. Por su parte, México registró 2.3 mil millones de dólares, que representa el 36.87% de su financiamiento total. Este nivel de asignación evidencia el reconocimiento de México como un actor estratégico en las agendas globales de biodiversidad y cambio climático, dada su riqueza en biodiversidad y su vulnerabilidad a los impactos climáticos. Sin embargo, al igual que Argentina, el país enfrenta desafíos importantes en la implementación efectiva de estos recursos, especialmente en términos de garantizar un impacto significativo y sostenible en la conservación y mitigación climática.



En el nivel **“MEDIO ALTO”** de ingresos sostenibles se ubican Honduras con 31.22%, Colombia con 30.07% y República Dominicana con 28.66%. Estos países han logrado canalizar una porción considerable de su financiamiento total para el desarrollo hacia iniciativas relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. Por su parte, Brasil con 21.28% se posiciona en el nivel **“MEDIO”**, lo que resulta notable considerando el tamaño de su economía y la relevancia de sus ecosistemas globales como la Amazonia. Sin embargo, su proporción es relativamente baja en relación con su relevancia regional, la cual plantea interrogantes sobre la efectividad de su estrategia para movilizar recursos internacionales destinados a la sostenibilidad. Esto podría afectar en su capacidad para implementar proyectos que cumplan con los estándares requeridos por los financiadores internacionales.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Guatemala con 17.49%, Nicaragua con 16.88% y Panamá con 16.07%. Aunque estos países enfrentan limitaciones estructurales y financieras, un aspecto positivo de Guatemala, es que el 29.91% de su financiamiento provino de subvenciones, lo que equivale a 55 millones de dólares. Este tipo de financiamiento no reembolsable reduce significativamente los riesgos asociados al endeudamiento y permite una mayor flexibilidad para implementar proyectos sostenibles sin comprometer la estabilidad fiscal a largo plazo.

En el nivel **“BAJO”** de ingresos sostenibles se encuentran Ecuador con 13.17%, Perú con 12.83%, Bolivia con 11.08%, Costa Rica con 9.77% y Cuba con 7.97%. El caso de Cuba es particularmente relevante, ya que el 100% de su financiamiento sostenible provino de subvenciones, sumando un total de 27 millones de dólares. Este enfoque, basado exclusivamente en subvenciones, contrasta con otros países de la región que dependen en gran medida de préstamos para financiar sus proyectos climáticos y de biodiversidad. Aunque esto puede interpretarse como una ventaja para Cuba en términos de evitar endeudamiento, la cantidad limitada de recursos disponibles sugiere una baja capacidad para implementar proyectos de gran escala.

En el nivel “MUY BAJO” se encuentran El Salvador con 6.91%, Paraguay con 6.75% y Jamaica con 4.71%

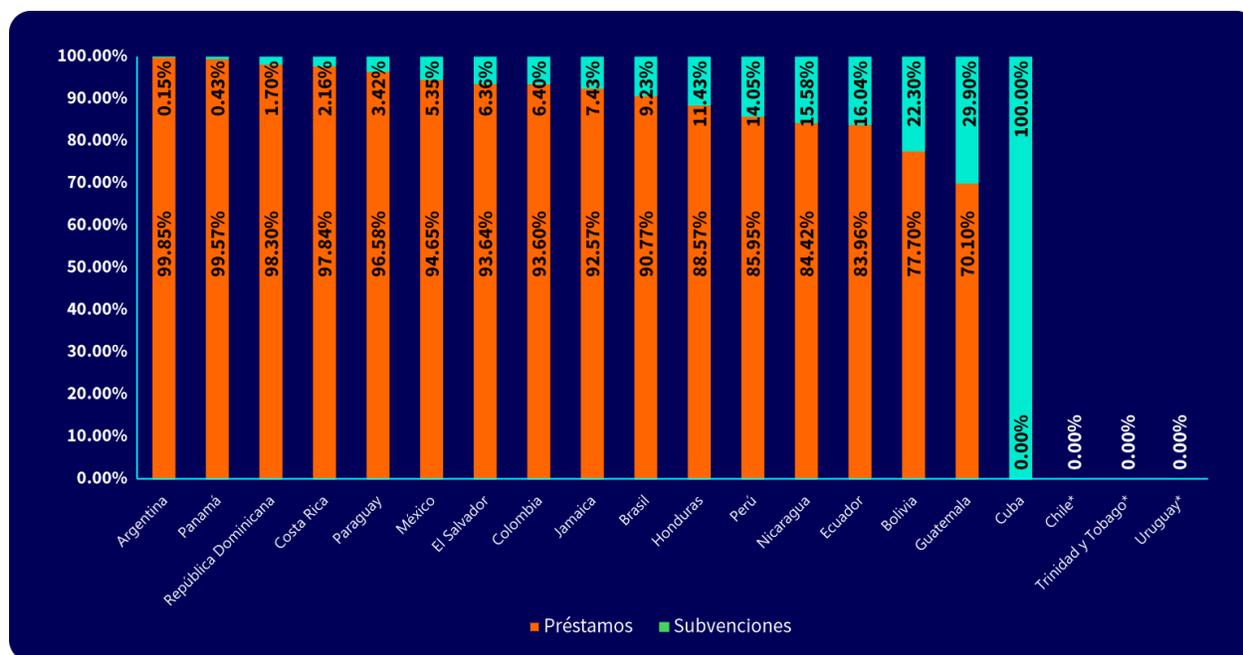
Estos países enfrentan desafíos importantes en la movilización de financiamiento sostenible. Sus bajos porcentajes pueden estar vinculados a restricciones estructurales en sus economías, así como a limitaciones en sus capacidades institucionales para acceder a fondos internacionales. Esto incluye problemas como marcos regulatorios inadecuados, falta de transparencia en el manejo de recursos y carencias en la planificación estratégica de

proyectos sostenibles, que limitan la confianza de los financiadores internacionales.

Además, el análisis de esta variable revela una tendencia preocupante: el 92.6% del financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático en la región se otorga en forma de préstamos, mientras que solo el 7.4% se distribuye como subvenciones.

Esta situación impone una carga financiera significativa sobre los países, quienes deberán reembolsar estos fondos, lo que podría limitar sus capacidades para invertir en otros sectores críticos para su desarrollo. Como se observa en la siguiente gráfica, países como Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana dependen en más del 95% de préstamos para financiar sus esfuerzos ambientales.

Gráfica 3. Flujo de financiamiento destinado a biodiversidad y cambio climático clasificado por préstamos y subvenciones en porcentaje para 2021



*Sin datos

Fuente: Elaboración propia con información de la OECD consultados en el Aid Atlas en 2024 con datos a 2021.

Si bien los préstamos son una herramienta válida, depender casi exclusivamente de ellos en una región con altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad climática es insostenible. Un cambio fundamental para aliviar esta presión consiste en aumentar las subvenciones, especialmente en un contexto donde muchas economías de la región enfrentan vulnerabilidades estructurales.

Sin embargo, el incremento de las subvenciones no debe ser visto como una solución numérica, sino como una oportunidad para optimizar el uso de estos recursos. Es indispensable que los fondos destinados a la protección de la biodiversidad y el cambio climático se asignen a proyectos con impacto reales y medibles, garantizando su efectividad y contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la conservación de los ecosistemas. De lo contrario, incluso un aumento

en la cantidad de recursos podría no generar los resultados esperados.

Para avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente, no basta con incrementar el financiamiento disponible, sino que es importante asegurar que este se distribuya de manera justa y equitativa entre los países más

necesitados, sin perpetuar las necesidades estructurales. Esto implica que la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad compartida con el diseño de mecanismos financieros más inclusivos, que promuevan el desarrollo económico sostenible sin poner en peligro la estabilidad fiscal de los países de la región.



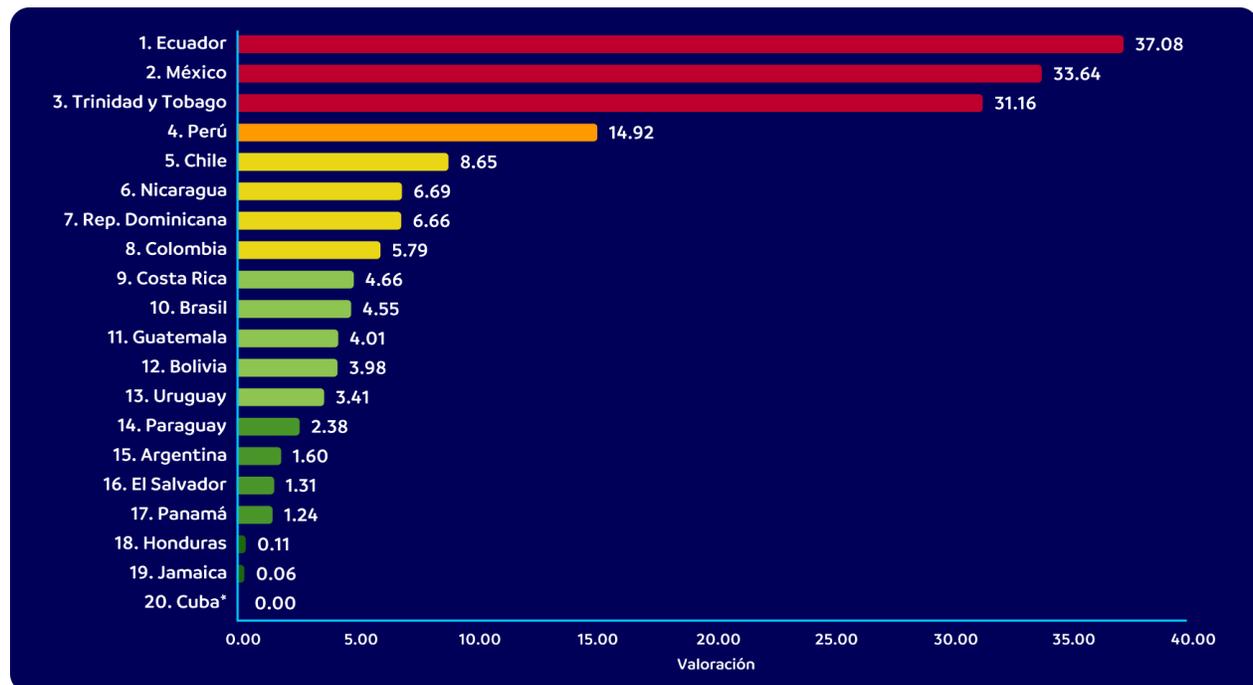


Ingresos Intensivos en Carbono

La variable de **Ingresos Intensivos en Carbono (IIC)** analiza la cantidad de recursos que provienen de esquemas tributarios y no tributarios aplicables a la comercialización, exportación de combustibles fósiles, así como aquellos ingresos asociados a la exportación y producción de hidrocarburos y minerales. El cálculo de esta variable se basa en el porcentaje que representan estos ingresos con respecto del total de los ingresos recaudados en los países de

estudio en 2023. Para esta edición, se utilizaron datos públicos obtenidos de informes y documentos oficiales nacionales. Es importante destacar que, debido a restricciones en la disponibilidad de datos desagregados, no fue posible incluir información para Cuba. Esto refleja una limitación común en el análisis de esta variable en la región, donde la transparencia y el acceso a datos detallados pueden variar significativamente entre los países.

Gráfica 4. Ranking de ingresos intensivos en carbono 2024 (% del total) datos a 2023



*Sin datos

Fuente: Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados revelan que Ecuador, México y Trinidad y Tobago destacan como las economías más dependientes de ingresos intensivos en carbono, situándose en el nivel **"MUVALTO"** de ingresos intensivos en carbono. Ecuador generó 16.1 mil millones de dólares, lo que representa el 37.08% de su ingreso total. México registró 133.3 mil millones de dólares, equivalentes al 33.64% de su ingreso total.

Trinidad y Tobago obtuvo 2.8 mil millones de dólares, lo que constituye el 31.15% de su ingreso total.

Esta alta dependencia de recursos fósiles plantea importantes retos para la implementación de políticas de transición energética. A pesar de los compromisos globales para la descarbonización, estos países enfrentan presiones significativas para mantener la inversión en la industria de los

combustibles fósiles, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para adoptar fuentes de energía más limpias y sostenibles.

En el nivel **“MEDIO ALTO”** se ubica Perú con un 14.92% de sus ingresos totales provenientes de actividades intensivas en carbono. La minería, especialmente de metales como el cobre y el oro, representan un componente clave en su economía, vinculando directamente a emisiones de carbono a nivel global.



En el nivel **“MEDIO”** se encuentran Chile con 8.65%, Nicaragua con 6.69%, República Dominicana con 6.66% y Colombia con 5.79%. Estos países mantienen una dependencia moderada de las actividades intensivas en carbono, aunque con una mayor diversificación económica en comparación con las economías más dependientes de los combustibles fósiles o la minería. No obstante, aún enfrentan grandes retos para reducir su exposición a estas fuentes de emisiones, particularmente en sectores estratégicos como la minería en Chile, que es uno de los mayores productores de cobre a nivel regional, y el sector de hidrocarburos en Colombia y República Dominicana.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Costa Rica con 4.66%, Brasil con 4.55%, Guatemala con 4.01%, Bolivia con 3.98% y Uruguay con 3.41%, presentando una menor proporción de ingresos vinculados a actividades intensivas en carbono. Aunque su dependencia de estas fuentes es relativamente baja, estos países aún deben afrontar el reto de reducir gradualmente su huella de carbono mientras fomentan una economía sostenible. Para lograr esto, deben fortalecer políticas públicas que incentiven la inversión en energías limpias y apoyen en la diversificación

económica hacia sectores menos intensivos en carbono.

En el nivel **“BAJO”** se sitúan Paraguay con 2.38%, Argentina con 1.60%, El Salvador con 1.31% y Panamá con 1.24%, lo que indica una baja dependencia de actividades intensivas en carbono.

Por otro lado, Honduras con 0.11% y Jamaica con 0.06% se ubican en el nivel “MUY BAJO” siendo las economías menos dependientes de actividades vinculadas a los combustibles fósiles en la región

Este escenario presenta una oportunidad para estos países, ya que podrían ser pioneros en la adopción de energías renovables y en el diseño de estrategias bajas en carbono. Sin embargo, este potencial debe ser respaldado por políticas proactivas, incentivos para la inversión climática y un fortalecimiento institucional que facilite el acceso a tecnologías limpias. Además, estos países deben aprovechar su baja dependencia para crear una infraestructura económica más sostenible y resiliente al cambio climático.

En general, estos resultados muestran que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe dependen económicamente de las actividades intensivas en carbono. Esta situación no solo dificulta el avance hacia economías sostenibles, sino que también representa un obstáculo importante para cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático, como los establecidos en el Acuerdo de París. En este sentido, la urgencia de implementar estrategias integrales para disminuir esta dependencia es fundamental. Estas estrategias deben centrarse en la diversificación económica, promoviendo sectores que reduzcan la vulnerabilidad de las economías frente a los mercados de combustibles fósiles y minerales. Asimismo, la transición hacia economías bajas en carbono requiere un rediseño de los esquemas tributarios, introduciendo impuestos ambientales que desincentiven las prácticas nocivas y fomenten alternativas sostenibles.



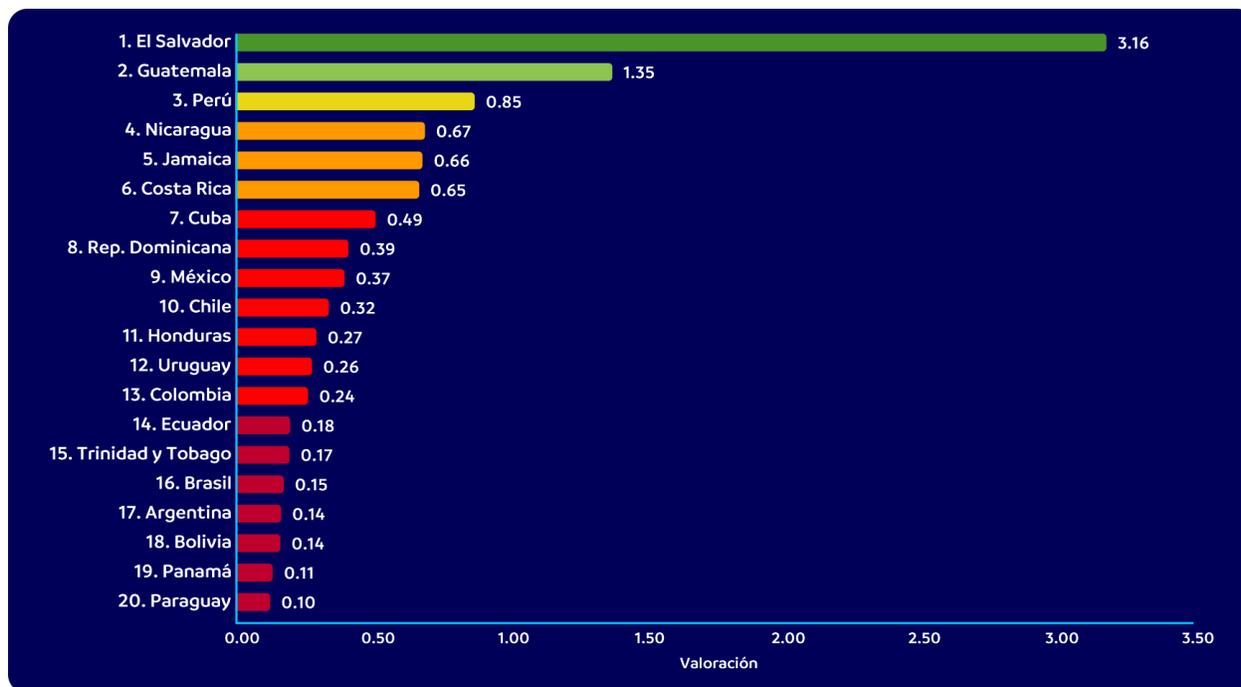
Presupuestos Sostenibles

La variable de **Presupuestos Sostenibles (PS)** analiza el presupuesto público que los gobiernos destinan a sectores clave relacionados con la sostenibilidad ambiental y climática. Este análisis incluye los recursos asignados específicamente a los rubros de biodiversidad, cambio climático y manejo forestal dentro del sector ambiental, los de eficiencia energética y energías renovables en el sector energético, y la atención de desastres naturales. Para esta edición, el análisis se basó en datos oficiales y públicos de cada uno de los 20 países de estudio. El cálculo de esta variable considera el porcentaje que estos rubros representan del presupuesto total asignado en

2023, proporcionando una perspectiva clara de las prioridades económicas en materia de sostenibilidad.

Es importante destacar que, aunque algunos países podrían estar asignando mayores recursos en estos sectores, la falta de etiquetado claro y detallado de los presupuestos puede dificultar la identificación precisa de los montos destinados. Por esta razón, para evitar una sobreestimación de esta variable, únicamente se contabilizan aquellos recursos explícitamente etiquetados como destinados a actividades de sostenibilidad ambiental o climática.

Gráfica 5. Ranking de presupuestos sostenibles 2024 (% del total) datos a 2023

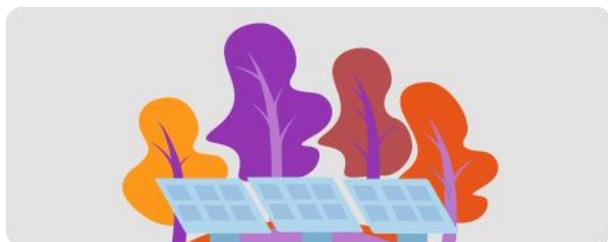


Fuente: Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados destacan a El Salvador como el país mejor posicionado con una asignación de 291 millones de dólares, lo que representa el 3.16% de su presupuesto total. Este porcentaje lo posiciona en el nivel **“ALTO”** destacándose como el único país que supera

significativamente la media regional y evidencia un compromiso notable con la integración de la sostenibilidad en su planificación presupuestaria.

Guatemala, con una asignación de 199 millones de dólares, equivalentes al 1.35% de su presupuesto total, se posiciona en el nivel **“MEDIO ALTO”** de presupuestos sostenibles. Sin embargo, ningún otro país destinó más del 1.0% de su presupuesto a los rubros vinculados con biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, y atención a desastres naturales. Este panorama general, muestra una priorización limitada de la sostenibilidad ambiental y climática dentro de los presupuestos nacionales. Por ende, es necesario que los países de la región redefinan sus prioridades presupuestarias y puedan cumplir con sus compromisos internacionales en materia ambiental y climática, y logren avanzar hacia modelos económicos más resilientes y sostenibles.



En el nivel **“MEDIO”** de presupuestos sostenibles se encuentra Perú con una asignación de 488 millones de dólares, representando el 0.85% de su presupuesto total. Aunque esta cifra se encuentra por encima del promedio regional, es insuficiente para abordar de manera integral los grandes desafíos climáticos y ambientales que enfrenta el país. La alta incidencia de desastres naturales, como inundaciones y sequías, exige una planificación presupuestaria más robusta que priorice la resiliencia climática y la conservación de los recursos naturales.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Nicaragua con 0.67%, Jamaica con 0.66% y Costa Rica con 0.65%. Estas asignaciones, son notablemente insuficientes para afrontar los desafíos climáticos específicos de cada país. En el caso de Nicaragua, uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos extremos en Centroamérica, requiere

recursos para mejorar su infraestructura resiliente y fortalecer la capacidad de adaptación de sus comunidades. Sin embargo, la baja asignación presupuestaria muestra la falta de priorización de estos desafíos críticos, dejando al país expuesto a impactos devastadores que afectan particularmente a las comunidades más vulnerables. Jamaica, como una isla caribeña, enfrenta grandes riesgos relacionados con la subida del nivel del mar, la degradación de ecosistemas costeros y la pérdida de biodiversidad marina. A pesar de estos desafíos, la falta de recursos asignados limita los esfuerzos para proteger sus ecosistemas. En grosso modo, este bajo nivel de inversión no solo limita la implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que también retrasa el progreso hacia una transición energética sostenible y la consolidación de economías bajas en carbono.

En el nivel **“BAJO”** de presupuestos sostenibles se ubican Cuba con 0.49%, República Dominicana con 0.39%, México con 0.37%, Chile con 0.32%, Honduras con 0.27%, Uruguay con 0.26% y Colombia con 0.24%. Estos países de la región presentan una gran brecha entre sus capacidades económicas, compromisos climáticos y las necesidades reales para enfrentar el cambio climático. Estas cifras muestran una asignación presupuestaria limitada, que no está alineada con los retos climáticos ni con las capacidades de estas naciones. En el caso de México, la alta dependencia de sectores intensivos en carbono, como los hidrocarburos, dificulta la redistribución de recursos hacia sectores sostenibles y retrasa el progreso hacia una transición energética.

En el nivel “MUY BAJO” de presupuestos sostenibles se encuentran Ecuador con 0.18%, Trinidad y Tobago con 0.17%, Brasil con 0.15% Argentina y Bolivia con 0.14%, Panamá con 0.11% y Paraguay con 0.10%. Estos países destinan menos del 0.20% de sus presupuestos nacionales a actividades sostenibles, situación que refleja una alarmante desconexión entre

las prioridades presupuestarias y los retos ambientales críticos que enfrentan estas naciones, particularmente en contexto de alta vulnerabilidad climática y riqueza ecológica.

En el caso de Ecuador y Bolivia, ambos países son altamente vulnerables a fenómenos climáticos extremos, que afectan tanto a sus economías como a sus poblaciones. Sin embargo, la limitada asignación de recursos a actividades sostenibles pone en riesgo su capacidad de implementar políticas de adaptación y mitigación efectivas. Por su parte, Brasil, hogar de la Amazonia, el ecosistema más grande y estratégico del mundo, enfrenta una contradicción entre el papel fundamental en la estabilidad climática global y la escasa inversión en sostenibilidad. La deforestación acelerada y la presión por expandir actividades extractivas no solo comprometen la biodiversidad, sino que también amenazan los compromisos internacionales de reducción de emisiones. Por tal motivo, es fundamental que estos países reevalúen sus prioridades presupuestarias y adopten estrategias que impulsen inversiones en sostenibilidad.

En suma, estos resultados evidencian una preocupante realidad: la mayoría de los países de América Latina y el Caribe asignan una fracción mínima de sus presupuestos nacionales a sectores críticos como la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la transición hacia energías renovables y la gestión de desastres naturales. Estos sectores no solo son fundamentales para abordar la creciente crisis climática, sino también para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de sus economías a largo plazo.

relativamente más altos dentro del contexto regional, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la escala y urgencia de los desafíos climáticos y ambientales. La mayoría de las naciones continúan rezagadas, destinando menos del 1% de sus presupuestos nacionales a actividades sostenibles. Este nivel de inversión es preocupante, ya que no solo limita la capacidad de respuesta ante los impactos del cambio climático, sino que también compromete el desarrollo socioeconómico y aumenta la vulnerabilidad de sus comunidades.

Para revertir esta tendencia, los gobiernos deben adoptar un enfoque transformador que combine un incremento sustancial en la asignación de recursos con estrategias integrales y coordinadas. Es fundamental priorizar áreas clave como la mitigación del cambio climático, las energías renovables y la conservación de ecosistemas críticos. Además, se deben implementar sistemas de etiquetado presupuestario claros y efectivos, que permitan rastrear los recursos destinados a iniciativas sostenibles, mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y el monitoreo del impacto de las inversiones.

La transición hacia economías verdes y resilientes no solo depende del volumen de recursos asignados, sino también de la calidad y efectividad de su uso. Requiere un compromiso por parte de los gobiernos para redefinir sus estrategias, integrando la sostenibilidad como un eje central y transversal en sus políticas públicas. En este contexto, la acción inmediata y decisiva será clave para enfrentar los desafíos climáticos, cumplir con los compromisos internacionales y garantizar un futuro sostenible para la región.

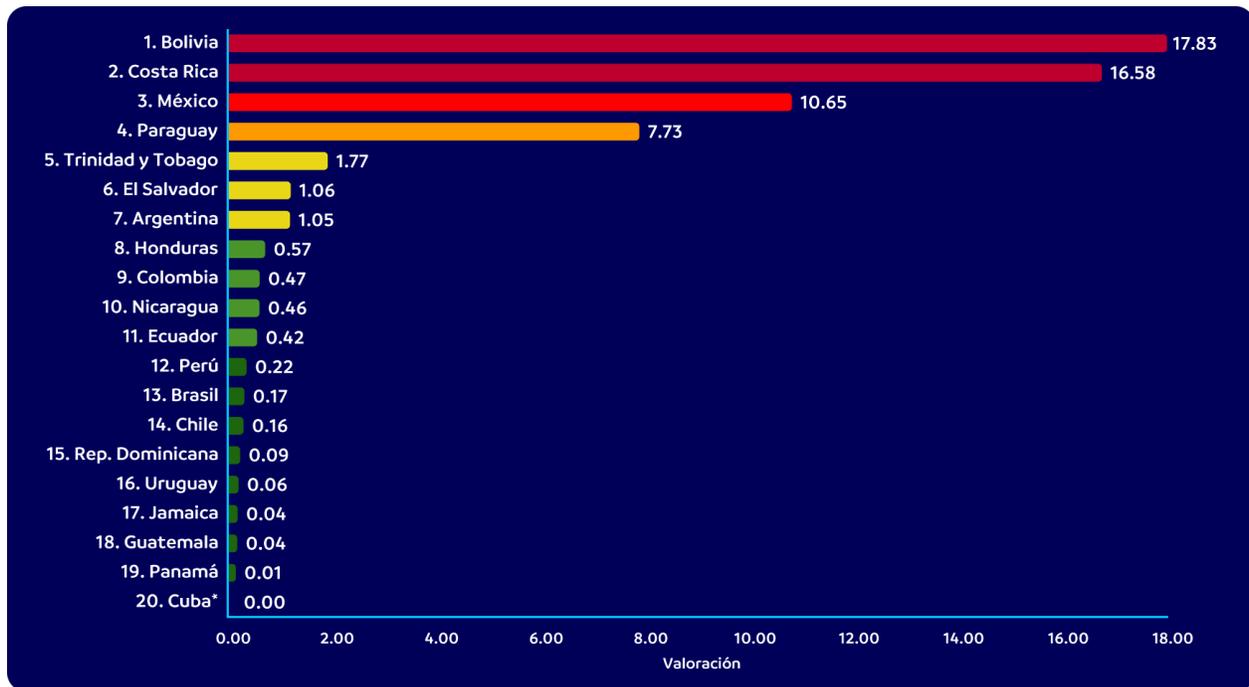


Presupuestos Intensivos en Carbono

La variable de **Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC)** analiza el presupuesto asignado a actividades como la explotación de hidrocarburos, incluyendo la exploración y extracción, refinería petroquímica y transporte, entre otras actividades dentro del sector energético. Además, incluye información sobre el presupuesto destinado a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo, en los países que cuentan con este tipo de empresas.

Para esta edición, el análisis se basó en datos públicos y oficiales de cada país correspondiente al año 2023. El cálculo de la variable se basa en el porcentaje que estos rubros representan del presupuesto total asignado en cada país. Sin embargo, en el caso de Cuba, no se obtuvo información desagregada sobre estas actividades debido a limitaciones en la disponibilidad de datos.

Gráfica 6. Ranking de presupuestos intensivo en carbono 2024 (% del total) datos a 2023



*Sin datos

Fuente: Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados indican que Bolivia y Costa Rica son los países con mayor proporción de su presupuesto nacional asignado a actividades relacionadas con la explotación y producción de hidrocarburos, ubicándose en el nivel **"MUY ALTO"** de presupuestos intensivos en carbono. Bolivia destinó 8.1 mil millones de dólares a este sector, lo que representa el 17.82% de su

presupuesto total, una cifra que refleja su fuerte dependencia económica en la explotación de hidrocarburos.

Este enfoque presupuestario muestra la contradicción entre la necesidad de diversificar su economía y su persistente inversión en sectores

con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

Por su parte, Costa Rica destinó 3.7 mil millones de dólares, equivalentes al 16.57% de su presupuesto total, principalmente a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)

Esta asignación resalta la necesidad del país de mantener la infraestructura vinculada al consumo de combustibles fósiles, lo que contrasta con los esfuerzos de descarbonización y desarrollo sostenible.

La elevada asignación de recursos a sectores intensivos en carbono en ambos países no solo limita su capacidad de financiar la transición hacia modelos energéticos más sostenibles, sino que también incrementa su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado energético global y a los impactos del cambio climático. En el caso de Bolivia, esta estrategia muestra la falta de un enfoque diversificado que priorice sectores con potencial de crecimiento sostenible. Para Costa Rica, la inversión en RECOPE plantea interrogantes sobre cómo el país podrá avanzar en sus compromisos climáticos sin un cambio estructural en sus prioridades presupuestarias.



En el nivel **“ALTO”** de presupuestos intensivos en carbono se encuentra México, que destinó el 10.65% de su presupuesto total a actividades relacionadas con la industria petrolera, mostrando una marcada dependencia de este sector. Una parte significativa de estos recursos se destinaron a Petróleos Mexicanos (PEMEX), enfocándose en proyectos de exploración, extracción y refinanciamiento de hidrocarburos.

Esta priorización no solo pone en duda la capacidad de México para cumplir con sus compromisos climáticos internacionales, sino que también contrasta con el enorme potencial del país en energías renovables, como la solar y eólica. La asignación actual perpetúa un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, retrasando la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático.

Por su parte, Paraguay se encuentra en el nivel **“MEDIO ALTO”**, con el 7.33% de su presupuesto dedicado a actividades intensivas en carbono. Aunque la proporción es menor que la de México, esta asignación se destina a los combustibles fósiles, limitando su capacidad de avanzar hacia estrategias de sostenibilidad y diversificación energética.

En el nivel **“MEDIO”** países como Trinidad y Tobago con 1.77%, El Salvador con 1.06% y Argentina con 1.05% muestran una menor proporción de asignaciones a actividades intensivas en carbono. Esta diferencia podría reflejar tanto una priorización de otros sectores estratégicos en sus presupuestos nacionales como limitaciones fiscales para financiar grandes proyectos en hidrocarburos. Sin embargo, este nivel de asignación también abre una ventana de oportunidad para que estos países redirijan recursos hacia iniciativas más sostenibles, como la transición energética y el fortalecimiento de sectores bajos en emisiones.

En el nivel **“BAJO”** de presupuestos intensivos en carbono se sitúan Honduras con 0.57%, Colombia con 0.47%, Nicaragua con 0.46% y Ecuador con 0.42%. Estas cifras sugieren una menor asignación directa a sectores como hidrocarburos y minería, lo que podría ser un indicador positivo en el contexto de la transición hacia economías menos dependientes del carbono. Esta tendencia, en principio, ofrece una oportunidad para que estos países prioricen inversiones en sectores sostenibles, como energías renovables y conservación ambiental. No obstante, esta baja

proporción de asignación presupuestaria podría en muchos casos, estar influenciada por restricciones fiscales que limitan la capacidad de inversión en proyectos de infraestructura energética.

En el nivel “MUY BAJO” de presupuestos intensivos en carbono se encuentran Perú con 0.22%, Brasil con 0.17%, Chile con 0.16%, República Dominicana con 0.09%, Uruguay con 0.06%, Jamaica y Guatemala con 0.04% y Panamá con 0.01%.

Estos porcentajes muestran asignaciones mínimas a actividades relacionadas con sectores como hidrocarburos y minería, lo que en principio podría interpretarse como una oportunidad para transitar hacia economías más sostenibles. Sin embargo, este nivel de inversión también plantea interrogantes sobre las fuentes reales de emisiones y las estrategias gubernamentales para abordar los desafíos ambientales. En el caso de Brasil y Chile, a pesar de sus bajos porcentajes de asignación directa, sus economías están significativamente vinculadas a sectores de alto impacto ambiental. Esta discrepancia sugiere que su dependencia de actividades intensivas en carbono podría estar más asociada a incentivos fiscales, subsidios indirectos y políticas sectoriales que no necesariamente se reflejan en

los presupuestos nacionales de manera explícita. Por tal motivo, estas situaciones resaltan la necesidad de conocer no solo las asignaciones presupuestarias directas, sino también los marcos regulatorios y los incentivos económicos que perpetúan las emisiones de carbono.

En suma, este análisis evidencia la urgencia de reorientar los presupuestos nacionales hacia actividades sostenibles, marcando un paso fundamental para enfrentar los retos del cambio climático y promover un desarrollo económico resiliente. La persistente asignación de recursos a sectores intensivos en carbono obstaculiza no sólo la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la transición hacia economías diversificadas y menos dependientes de combustibles fósiles.

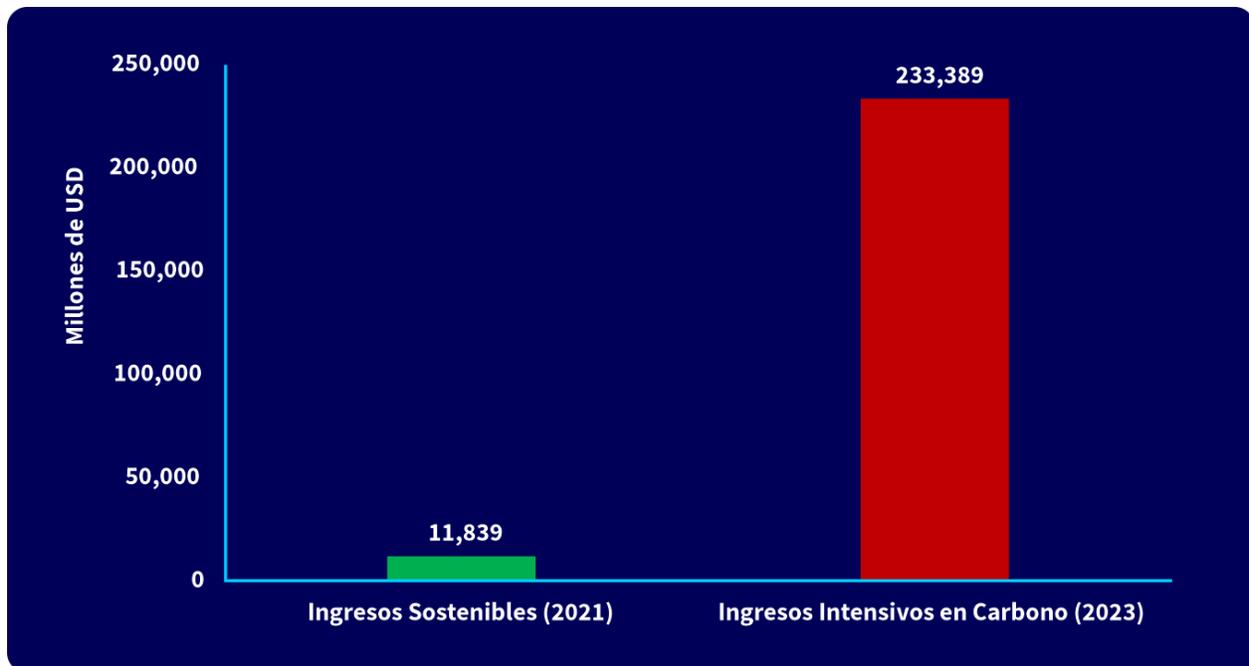
La reorientación del presupuesto hacia alternativas limpias y sostenible no es únicamente una cuestión ambiental, sino una estrategia integral para garantizar la estabilidad y seguridad económica a largo plazo. Al adoptar políticas fiscales y presupuestarias que prioricen la inversión en energías renovables y conservación ambiental, los países de la región podrán ser menos dependientes del carbono y más resilientes a las crisis globales, y preparados para transitar hacia un modelo más justo y sustentable.

Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los ingresos sostenibles (datos de 2021) y los ingresos intensivos en carbono (datos de 2023) muestran una preocupante disparidad en las prioridades económicas de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Este contraste refleja el limitado avance en la alineación de los flujos financieros con los objetivos globales de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.

Los datos son contundentes: en los 20 países analizados, los ingresos derivados de actividades emisoras de carbono superaron ampliamente a los recursos destinados a la protección de biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Mientras los fondos asignados para iniciativas sostenibles alcanzaron apenas 11,839 millones de dólares, las actividades intensivas en carbono generaron 233,389 millones de dólares, representando 19 veces más ingresos.

Gráfica 7. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)



Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD consultados en el Aid Atlas y en diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Esta brecha no solo resalta la dependencia económica de la región en actividades extractivas y emisoras, como la explotación de combustibles fósiles y la minería, sino que también refleja la necesidad de un cambio estructural para financiar la transición hacia economías bajas en carbono.

Cuando se analiza únicamente el financiamiento climático, la brecha es aún más alarmante: los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono superan en 25 veces los recursos destinados a la lucha

contra el cambio climático, que alcanzan los 9,207 millones de dólares.

Estas cifras detallan la continua dependencia de la región en sectores altamente contaminantes y muestran la necesidad de un cambio estructural en las políticas económicas y de financiamiento.

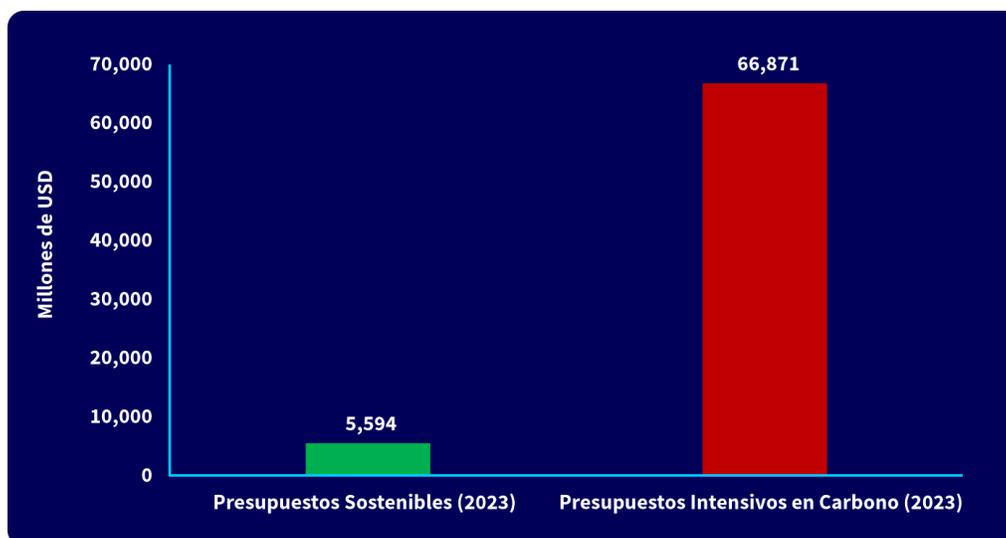
La disparidad en los flujos financieros revela que, mientras los ingresos de actividades intensivas en carbono continúan dominando, los recursos destinados a mitigar el impacto del cambio climático siguen siendo insuficientes. En un contexto donde la crisis climática ya está teniendo efectos devastadores, esta brecha financiera debe cerrarse con urgencia para asegurar un futuro sostenible y resiliente.

Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo de los presupuestos sostenibles frente a los presupuestos intensivos en carbono, utilizando datos de 2023, expone una contradicción en la asignación de recursos públicos en la región. Este contraste no solo mide el nivel de compromiso de los países con la lucha contra el cambio climático, sino que también evalúa las prioridades reales detrás de las decisiones presupuestarias.

Los datos son preocupantes: los 20 países analizados asignaron 66,871 millones de dólares a actividades intensivas en carbono, mientras que solo 5,594 millones de dólares se destinaron a iniciativas sostenibles. Esto implica que, en promedio, se destinó 12 veces más en sectores que generan altas emisiones de carbono que en aquellos orientados a mitigar el cambio climático y fomentar economías resilientes.

Gráfica 8. Análisis regional: Presupuestos Sostenibles (2023) versus Presupuestos Intensivos en Carbono (2023)



Fuente: Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.



Este desequilibrio presupuestario evidencia las contradicciones entre las promesas de los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y la realidad de sus asignaciones presupuestales. A pesar de los compromisos asumidos por muchos gobiernos para avanzar hacia economías bajas en carbono, los datos revelan que los recursos destinados a actividades que intensifican el calentamiento global superan a los destinados a iniciativas sostenibles. Sin una reorientación estratégica de los recursos públicos, los objetivos de reducir las emisiones y fomentar economías resilientes quedarán fuera de alcance.



Contexto regional: Análisis de las variables cualitativas

Financiamiento para la Biodiversidad (2021)



Recibido:
\$1.3 mil millones
(32.58% del financiamiento global para biodiversidad)

Total Global: \$4.0 mil millones
Desafíos: Deforestación, pérdida de hábitats, cambio climático, capacidad institucional limitada para la gestión de recursos.

Financiamiento para el Cambio Climático (2021)



Recibido:
\$9.6 mil millones
(16.19% del financiamiento global para el desarrollo climático)

Total Global: \$59.3 mil millones
Desafíos: Recursos limitados para mitigación/adaptación, distribución desigual, accesibilidad restringida.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (2021)



Participación regional:
8.12% del total global
de emisiones GEI

Emisiones totales: 4.1 mil millones de toneladas métricas de CO₂e
Total Global: 49.5 mil millones de toneladas métricas de CO₂e
Preocupaciones: Vulnerabilidad socioambiental, compromisos climáticos globales.

Economía Regional (2023)



Participación regional:
8.12% del total global
(en relación con GEI)
Total Global: \$105.4 mil millones
Tasa de crecimiento: 1.4% (por debajo del promedio global de 1.8%)

Desempleo (2023)



Tasa regional:
6.12%
(superior al promedio global de 5.0%)
Desafíos: Problemas estructurales del mercado laboral, desigualdad, falta de políticas de empleo inclusivas.

Conclusiones

El IFS 2024 envía un mensaje claro y urgente: los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad única para liderar la transición global hacia la sostenibilidad. Sin embargo, lograr este objetivo requiere profundas transformaciones a nivel nacional y un sólido respaldo internacional. Para lograrlo, los gobiernos deben priorizar una serie de reformas estructurales que faciliten la transición hacia economías más sostenibles, entre las que destacan: reformas presupuestarias y fiscales, en las cuales se incrementen la asignación de recursos hacia energías limpias, proyectos de eficiencia energética y medidas de adaptación al cambio climático; la desincentivación de las actividades económicas, como la explotación de combustibles fósiles, mediante la eliminación progresiva de subsidios y la introducción de impuestos al carbono; y el acceso al financiamiento de proyectos sostenibles, especialmente en sectores clave como en la protección de la biodiversidad y recursos renovables.

El éxito de esta transición no depende únicamente de los esfuerzos locales. La cooperación internacional es fundamental para propiciar recursos y eliminar barreras financieras que dificulten el progreso. En este sentido, las instituciones financieras y bancos de desarrollo deben asumir un rol activo en la financiación de proyectos sostenibles, ofreciendo condiciones favorables para los países en desarrollo. Además, se deben gestionar compromisos globales de financiamiento climático, como el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) establecido en la COP 29 en Bakú. Este objetivo debe priorizar el financiamiento público en forma de subvenciones, particularmente para acciones de adaptación, a fin de evitar un aumento en los niveles de deuda de los países más afectados por la crisis climática.

El reto más importante es garantizar que el desarrollo económico de la región sea inclusivo, resiliente y sostenible. Esto implica no solo adaptarse a los efectos del cambio climático, sino también aprovechar la transición energética como una oportunidad para reducir las desigualdades, crear empleos verdes y fortalecer la seguridad económica y ambiental de la región.

El IFS 2024 ofrece una hoja de ruta clara: señala dónde están las brechas, qué áreas requieren mayor inversión y cómo los países pueden priorizar la sostenibilidad en sus agendas económicas. Este momento decisivo demanda voluntad política, cooperación internacional y un enfoque estratégico para garantizar que el desarrollo de la región esté preparado para enfrentar los desafíos del futuro.



ifs24
Índice de Finanzas
Sostenibles 2024

www.sustainablefinance4future.org